

0005/2024**I**

Tal y como dispone el artículo 1 del texto sometido a informe constituye su objeto la aprobación del Estatuto de las personas cooperantes en cumplimiento de lo previsto en el artículo 44, párrafo segundo, de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.

La norma consta de una exposición de motivos y una parte dispositiva conformada por su articulado —con un total de dieciocho artículos—, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, y cuatro disposiciones finales.

El texto del Real Decreto introduce una nueva definición de la figura del cooperante, fijando, entre otros aspectos, sus derechos y obligaciones, formación, oportunidades de carrera profesional, homologación de los servicios que prestan, previsión social y régimen de incompatibilidades. De este modo, el proyecto desarrolla el mandato previsto en la citada norma con rango de Ley formal, actualizando las disposiciones contenidas en su antecedente directo, el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, que, a su vez, deroga.

En líneas generales, la definición de cooperante del reglamento encaja con la recogida en el artículo 44 de la ley de la que trae causa, si bien se circunscribe —únicamente— a aquellas personas (cooperantes) *con destino en alguno de los países o territorios recogidos en el apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto*. A su vez, además de a los ciudadanos españoles, la definición reglamentaria reconoce *también* la condición de cooperante a los ciudadanos de algún otro Estado miembro de la Unión Europea o de un país tercero, siempre que se acredite la existencia de una vinculación laboral o relación estatutaria regulada por el derecho administrativo con una entidad promotora de las descritas en el reglamento que se informa.

Una primera consecuencia del análisis de la figura del cooperante apunta a la realización de transferencias internacionales de datos de carácter personal que, con carácter general, resultarán inherentes a la regulación de su

estatuto y al desarrollo de sus servicios, y que, en todo caso, deberán respetar lo dispuesto en el Capítulo V del Reglamento general de protección de datos.

Baste en este punto recordar que, de acuerdo con el artículo 44 del RGPD —Principio general de las transferencias—, *“solo se realizarán transferencias de datos personales que sean objeto de tratamiento o vayan a serlo tras su transferencia a un tercer país u organización internacional si, a reserva de las demás disposiciones del presente Reglamento, el responsable y el encargado del tratamiento cumplen las condiciones establecidas en el presente capítulo, incluidas las relativas a las transferencias ulteriores de datos personales desde el tercer país u organización internacional a otro tercer país u otra organización internacional. Todas las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a fin de asegurar que el nivel de protección de las personas físicas garantizado por el presente Reglamento no se vea menoscabado.”*

La segunda consecuencia derivada de la prestación de servicios por parte del cooperante fuera del territorio español se concreta en la aplicación, *intuitu personae*, de las normas de derecho interno que contienen su estatuto y régimen jurídico. Así, resultarán aplicables —con carácter extraterritorial— las normas que contienen los derechos y obligaciones del cooperante durante la prestación de sus servicios en el extranjero.

De lo anterior se infiere que, también en materia de protección de los datos de carácter personal del cooperante, debería procederse al reconocimiento de este derecho dentro del elenco del artículo 4 del proyecto de Real Decreto que se analiza, toda vez que en este punto no se ha dispuesto previsión alguna en relación con este derecho fundamental de los afectados en el ámbito de su relación laboral, funcionarial y/o estatutaria. En consecuencia, se sugiere la incorporación del reconocimiento y garantía de dicho derecho dentro del citado art. 4.

II

En cuanto al responsable del tratamiento de los datos de los cooperantes, habrá de estarse a la definición del artículo 4.7 del RGPD, cuando dispone que dicha condición corresponde a *“la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; (...)”*, y, en su virtud, determinar con carácter general en quién concurre dicha figura.

En este sentido, del análisis del texto sometido a informe, no se extrae con la debida claridad la determinación del responsable de cada uno de los tratamientos de datos que la norma contempla. De tal modo, en el proyecto resultaría necesario explicitar para cada caso en quién concurre tal condición,

toda vez que, según se deduce, dependiendo de los diferentes tratamientos, dicha consideración podría concurrir bien en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUEC), bien en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), o bien en otros órganos administrativos de los previstos en la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de cuyo desarrollo se trata.

El proyecto de Real Decreto se refiere a (i) los derechos y deberes específicos que corresponden a las personas cooperantes, (ii) a la relación jurídica con la entidad promotora de cooperación internacional y a las obligaciones de estas entidades, (iii) al apoyo al retorno y certificación de labores realizadas, y (iv) a los aspectos relativos al seguro colectivo y al régimen público de protección social aplicable a las personas cooperantes.

En lo que atañe a la protección de datos de carácter personal, deben analizarse varios preceptos que inciden sobre dicha materia.

De acuerdo con el artículo 6.1 del Reglamento general de protección de datos, RGPD, para que el tratamiento de los datos de carácter personal de los cooperantes sea “lícito” resulta necesario establecer las bases jurídicas que ampara dicho tratamiento.

A este respecto, deberían fijarse claramente en el Real Decreto que se informa, las bases jurídicas que legitiman el tratamiento de los datos de carácter personal de los cooperantes.

Muy especialmente, el artículo 4 del proyecto reglamentario regula los derechos de las personas cooperantes, sin mención alguna a la base jurídica que, en cada caso, justifica el tratamiento de datos implícito a dicho reconocimiento.

Así, dichas bases podrían incardinarse, según los casos, en:

- (i) La previsión del art. 6.1. b) RGPD, *para la ejecución de un contrato en el que el interesado (el cooperante) es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales,*
- (ii) la previsión del art. 6.1.e) RGPD, cuando dispone que “e) *el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento* ,

Del mismo modo, respecto a las “Obligaciones de las entidades promotoras de la cooperación” —artículo 9 del proyecto—, tampoco se contienen en el Real Decreto las bases jurídicas que legitiman el tratamiento de

los datos de carácter personal de los cooperantes, limitándose el apartado f) del artículo 9.1 a enunciar que la realización de tratamientos de datos recogidos en el contrato y el acuerdo complementario de destino, se someterán al RGPD y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

Así, debe advertirse que el sometimiento a la citada normativa no justifica la total carencia de identificación de las finalidades y bases jurídicas de los tratamientos, tanto en orden al respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica, como por el hecho de que las finalidades o la base jurídica de los tratamientos son informaciones que deben proporcionarse a los interesados y recogerse en el registro de actividades de tratamiento —artículos 13 y 14 RGPD—.

La falta de precisión en la determinación de las bases jurídicas del tratamiento conlleva, además, la indefinición en lo que se refiere a la normativa específicamente aplicable en cada caso. Así, a modo de ejemplo, cuando en el apartado b) del artículo 9.1 del Proyecto se señala que las entidades promotoras de la cooperación deberán *“Depositar, en el registro correspondiente, una copia firmada del contrato de trabajo u otro título habilitante y del acuerdo complementario de destino al que se refiere el artículo 10, dentro de los 20 días siguientes a su firma y antes de la partida al destino en el exterior de la persona cooperante”*, no se indica si dicha copia del contrato que deba depositarse y registrarse coincide o no con la regulada en el artículo 8.4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y por otro lado tampoco se explica por qué, mientras que el Estatuto de los Trabajadores establece que lo que se envía a la Oficina de Empleo es una “copia básica del contrato”, en este decreto que se informa se impone un tratamiento de datos más amplio, consistente en el envío al “registro correspondiente” (que no se dice cuál es) de una “copia firmada del contrato de trabajo”, sin añadir el adjetivo de “básica”; luego dicho “copia”, lo es completa. En opinión de esta Agencia, dicha previsión incumpliría dos preceptos del Reglamento; en primer lugar, el principio de limitación de la finalidad (art. 5.1.b) RGPD), ya que no se expone cuál es la finalidad necesaria del envío del contrato, íntegro y firmado, a un registro diferente del señalado en el art. 8 del Estatuto de los Trabajadores (ET). Y en segundo lugar el principio de minimización de datos (art. 5.1.c) RGPD), ya que tampoco se expone por qué hacen falta más datos que los que el ET establece para la copia “básica”. No existe en la MAIN ninguna referencia al impacto que los tratamientos que se derivan de esta norma habrán de tener en los datos personales de los interesados, ni existe ningún análisis de riesgos ni evaluación de impacto en materia de protección de datos, luego esta AEPD no puede conocer ni la finalidad, ni el porqué de dicho registro del contrato.

III

Por su parte, la Disposición adicional primera del proyecto — Colaboración con las comunidades autónomas y otras administraciones públicas—, dispone que *“1. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUEC) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) podrán suscribir los acuerdos y marcos de actuación con las comunidades autónomas y otras administraciones públicas que resulten necesarios para la regulación del intercambio de información en lo relativo a las entidades promotoras y a las personas cooperantes. En dichos convenios se deberán establecer los medios necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de información y transparencia, en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 2. En tanto no se concreten los mecanismos de intercambio de información a los que hace referencia el apartado primero y resulten plenamente operativos, el MAUEC, a través de la AECID, promoverá el intercambio de información mediante la utilización de los sistemas de información existentes.”*

Pues bien, a este respecto, es necesario recordar que la posible comunicación de información con datos de carácter personal realizada entre el MAUEC y/o la AECID, y otras Administraciones públicas u órganos administrativos, debe ajustarse a los principios relativos al tratamiento de datos regulados en el artículo 5 RGPD, y, muy especialmente, al ya citado principio de limitación de la finalidad —ex artículo 5.1.b)— según el cual los datos personales serán *“b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»).*”

En consecuencia, la mención específica de la Disposición adicional primera, sobre el cumplimiento de las obligaciones de información y transparencia, en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, debe entenderse en términos de estricta observancia del criterio constitucional —por todas, la STC 17/2013, de 31 de enero, y STC 292/2000, de 30 de noviembre—, recogido por esta Agencia de forma reiterada —entre otros— en sus Informes jurídicos 108/2018, 155/2018 y 175/2018.

En este sentido, según se advierte, si bien la Sección II del Capítulo IV de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global —bajo el título “La cooperación descentralizada”, artículos 35 al 37—, atribuye determinado nivel de competencia a las comunidades autónomas y a los entes locales y forales, la ausencia de una clara determinación de fines y funciones concretas de estas

Administraciones públicas, no justificaría la comunicación de datos personales entre ellas dado que estos datos están, en principio, afectos a finalidades concretas y predeterminadas que son las que motivaron su recogida y tratamiento por parte del Responsable del tratamiento, ya que se desconoce del Proyecto las finalidades para dicha cesión de datos.

En conclusión:

- a) Conforme a la doctrina constitucional (STC 17/2013, de 31 de enero, y STC 292/2000, de 30 de noviembre), el derecho fundamental a la protección de los datos personales impone la prohibición de que los poderes públicos se conviertan en fuentes de información personal sin las debidas garantías; y también el deber de prevenir los riesgos que puedan derivarse del acceso o divulgación indebidas de dicha información.
- b) Corresponde al legislador determinar cuándo concurre el bien o derecho que justifica la restricción del derecho a la protección de datos personales y en qué circunstancias puede limitarse.
- c) De los artículos 35 al 37 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, no se extrae la base jurídica que puedan servir para justificar la comunicación de los datos de carácter personal de los cooperantes entre diferentes Administraciones públicas, correspondiendo al redactor de la norma la determinación de esta.
- d) La mención de la Disposición adicional primera del proyecto que se informa al *"cumplimiento de las obligaciones de información y transparencia, en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales"* resultaría insuficiente en orden a la garantía de los principios de "licitud, lealtad y transparencia" y de "limitación de la finalidad" del RGPD.

IV

En cuanto al sometimiento del proyecto a la normativa de protección de datos, cuando el artículo 9 del Real Decreto que se informa desarrolla *las obligaciones de las entidades promotoras de la cooperación*, su apartado 1.f) se refiere específicamente al cumplimiento por estas promotoras de las obligaciones en dicha materia. Sin embargo, la citada mención a la salvaguarda del derecho fundamental a la protección de datos respecto a este aspecto concreto resulta insuficiente en el contexto de la realización de múltiples y variados tipos de tratamientos de datos de carácter personal que resultan del proyecto, que irían más allá de la confección de contratos y acuerdos complementarios de destino que se refieran a los cooperantes, que parecen, por el contrario, ser los únicos a los que se aplica la normativa de la que trae causa el citado derecho.

Del análisis de la norma sometida a informe, se extrae la necesaria mención general, expresa y taxativa a la protección de los datos de carácter personal de las personas afectadas por los tratamientos de datos, pudiendo para ello el órgano consultante proceder a la redacción específica de un precepto concreto en el que se reconozca el sometimiento de todos y cada uno de los tratamientos de datos personales a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

V

Por su parte, el artículo 13.5 del texto reglamentario que se informa dispone que:

“13.5. Las personas dependientes o vinculadas a cualquier iglesia, confesión o comunidad religiosa inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a las que hace referencia el artículo 3.3.d) de este estatuto, en los supuestos en los que se hayan adherido al seguro colectivo previsto en este artículo, deberán depositar, además de la copia simple del acuerdo complementario de destino con el contenido mínimo recogido en este estatuto, una declaración responsable firmada por el representante de la entidad religiosa o por el superior jerárquico, que indique la adscripción de la persona cooperante a la entidad religiosa. En dicha declaración responsable se deberá indicar el nombre de la entidad religiosa y el número de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.”

Dicho precepto merece un análisis específico por cuanto —de su actual versión— derivaría el posible tratamiento de datos de especial sensibilidad con infracción de la normativa de protección de datos.

Así, el cuanto a la adhesión al seguro colectivo de las personas “adscritas” a una determinada entidad religiosa, estas serán las personas dependientes o vinculadas a cualquier iglesia, confesión o comunidad religiosa a que se refiere la primera frase del apartado, respecto de las que se prevé la emisión y depósito de una declaración responsable, firmada por el representante de la entidad religiosa o por el superior jerárquico, que indique la circunstancia de la *adscripción* de la persona cooperante a la citada entidad.

En primer lugar, esta Agencia considera que la regulación de la posibilidad de que estas personas se adhieran, en su caso, al seguro colectivo previsto por el precepto sería positiva (véase ya la Disposición Adicional quinta del Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los cooperantes, que quedaría derogado con el proyecto informado). Ahora bien, lo que se objeta es esa declaración de “adscripción” que están obligados a presentar, y respecto de la cual, y como ya hemos mencionado anteriormente para otro supuesto, la MAIN carece de cualquier análisis acerca de cómo afectaría a los derechos de dichos interesados (en este caso, a su derecho a que no se traten datos que revelen su religión o ideología) la necesidad de realizar una declaración responsable de ese tipo, y su constancia en un registro.

Es más, se advierte que para otros casos de inclusión en el seguro colectivo no es necesaria una “declaración responsable de adscripción”, sino que basta con que la persona esté “vinculada a su organización”. Así, por ejemplo, en la Disposición adicional segunda respecto de los voluntarios, lo que supondría además una diferencia de trato que no se justifica en el proyecto.

En el supuesto que se analiza, la información relativa a la “adscripción” a una determinada entidad religiosa podría revelar —directa o indirectamente— las convicciones religiosas o filosóficas de las personas, en el sentido descrito en el artículo 9 del Reglamento general de protección de datos, constituyendo un tipo de tratamiento de categorías especiales de datos cuya prohibición inicial se dispone en su apartado 1:

9.1: “Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física.”

En este sentido, la remoción de dicha prohibición para el tratamiento de este tipo de datos en el ámbito de “sus actividades legítimas y con las debidas garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical”, recogida por el artículo 9.2, letra d), del propio RGPD, se circunscribe únicamente a dicho ámbito interno, e impide —en todo caso— que los datos personales se comuniquen fuera de dicho ámbito sin el consentimiento de los interesados.

Además, según se observa, en el supuesto del Real Decreto sometido a informe no concurre tampoco ninguna otra de las excepciones establecidas en el citado artículo 9.2 del RGPD, y, en concreto, no resultaría aplicable (si bien el Proyecto ni lo menciona) la habilitación de la *letra b)* del artículo 9.2 del RGPD,

toda vez que no se establecen en una ley *garantías adecuadas* al respeto de los derechos fundamentales y de los intereses de los cooperantes afectados exigidos en el supuesto descrito en dicha *letra b)*.

En este punto, conviene recordar los peligros inherentes al tratamiento de los datos personales sobre creencias religiosas o filosóficas, que, al igual que ocurre con los datos sobre opiniones y filiación política, conllevan riesgos para los individuos, porque podrían producirse decisiones que les afectasen en el presente o en el futuro, o bien, aplicar a dichos individuos determinados sesgos y perfiles de alcance y consecuencias desconocidas. Así, podríamos encontrarnos con resultados discriminatorios (o incluso, tal y como se ha puesto de manifiesto en la Historia en múltiples ocasiones, con persecuciones por razón de raza, religión o creencias) por razón de opiniones políticas o creencias religiosas, siendo los miembros de un determinado grupo religioso atacados o discriminados.

En conclusión, esta Agencia entiende que debería de modificarse la redacción del artículo 13.5 del proyecto de real decreto para su encaje con lo dispuesto en la normativa de protección de datos, suprimiéndose cualquier concepto, término o definición *de los que pudiese deducirse* la confesionalidad de las personas físicas cooperantes afectadas. En su lugar, el redactor de la norma *podría* referirse al “vínculo” de las personas cooperantes con dichas entidades en función de su relación de servicios, laboral y/o cooperativa, para el desarrollo o la acción humanitaria, de la misma manera que, como ya se ha citado, se menciona al “vínculo” de los voluntarios con su organización en la DA 2ª del proyecto. Esa “vinculación” no tiene por qué ser, necesariamente, de pertenencia a dicha confesión religiosa (podría ser, como ejemplo, una persona contratada por dicha entidad religiosa con unas creencias diferentes), pero no puede admitirse una declaración que suponga un reconocimiento de la “adscripción”, en el sentido de pertenencia, a una determinada confesión o religión.

VI

Finalmente, el proyecto que se informa debería referirse a las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial y el buen uso de la información con datos de carácter personal, así como la adecuada tutela de la información que afecte a los datos personales, conteniendo previsiones específicas en relación con la seguridad en el tratamiento de los datos de carácter personal objeto de tratamiento, toda vez que el texto analizado carece de previsión alguna al respecto.

En este sentido, el artículo 24.1 RGPD dispone que *“Teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente Reglamento. Dichas medidas se revisarán y actualizarán cuando sea necesario”*.

A su vez, en relación con la seguridad de la información, el artículo 32.1 establece que *“Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo (...)”*.

Asimismo, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad:

“Artículo 3. Sistemas de información que traten datos personales.

1. Cuando un sistema de información trate datos personales le será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o, en su caso, la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, el resto de normativa de aplicación, así como los criterios que se establezcan por la Agencia Española de Protección de Datos o en su ámbito competencial, por las autoridades autonómicas de protección de datos, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el presente real decreto.

2. En estos supuestos, el responsable o el encargado del tratamiento, asesorado por el delegado de protección de datos, realizarán un análisis de riesgos conforme al artículo 24 del Reglamento General de Protección de Datos y, en los supuestos de su artículo 35, una evaluación de impacto en la protección de datos.

3. En todo caso, prevalecerán las medidas a implantar como consecuencia del análisis de riesgos y, en su caso, de la evaluación de

impacto a los que se refiere el apartado anterior, en caso de resultar agravadas respecto de las previstas en el presente real decreto.”

En consecuencia, se propone la incorporación explícita en la norma informada de una mención al análisis de los riesgos de seguridad inherentes al tratamiento de los datos de carácter personal, sugiriéndose —a tales efectos— la siguiente redacción:

Los sistemas de información que traten datos personales deberán garantizar la aplicación de las medidas técnicas y organizativas que resulten del correspondiente análisis de riesgos conforme al artículo 24 del Reglamento General de Protección de Datos y, en los supuestos de su artículo 35, una evaluación de impacto en la protección de datos por el responsable o el encargado del tratamiento, asesorado por el delegado de protección de datos, en los términos previstos en el artículo 3 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

VII

En conclusión, tal y como se ha analizado, son numerosos los tratamientos de datos previstos en la norma que se informa con incidencia en los cooperantes. Así, a efectos meramente ilustrativos, (i) el intercambio de información personal entre Administraciones y organismos públicos y/o privados —DA1^a—, (ii) la incorporación de los datos personales del cooperante al Servicio Público de Empleo Estatal —DA3^a—, (iii) el tratamiento del dato relativo a la nacionalidad (acreditada documentalmente) —artículo 2—, (iv) la consideración de la circunstancia personal del desplazamiento, permanencia y/o retorno —artículos 3 y 15—, (v) los tratamientos derivados del ejercicio de derechos laborales o estatutarios, así como relativos a la formalización de certificaciones —artículo 4—, (vi) la inscripción en registros públicos, y, especialmente, en registros consulares —artículo 5—, (vii) los tratamientos de datos personales relativos a información y control del comportamiento, así como de la seguridad personal del cooperante —artículos 4, 5 y 9—, (viii) la gestión aseguradora y soporte sanitario —artículos 10, 12 y 13—, (ix) la formación y la emisión de certificados formativos y laborales, (x) la gestión y tramitación de indemnizaciones —artículo 17—, y (xi) el seguimiento e intercambio de información (con incidencia incluso registral) —artículo 18—.

En consecuencia, a nuestro juicio, el redactor del proyecto de Real Decreto debería abordar con la necesaria amplitud su adecuación con la normativa de protección de datos, debiendo contar para ello con su Delegado de Protección de Datos (DPD). A dichos efectos, podría considerarse —incluso— la posibilidad de introducir una disposición adicional, o un artículo, en dicha

norma, relativo al tratamiento de datos de carácter personal, en el que se desarrollasen conforme a dicha normativa los aspectos relativos a (i) la responsabilidad de los tratamientos, (ii) las bases jurídicas que, en materia de protección de datos, justifican los tratamientos de datos personales, especialmente en el ámbito de los derechos y deberes de los cooperantes, y de las obligaciones de las entidades promotoras de cooperación, y (iii) las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial y el buen uso de la información con datos de carácter personal de las personas afectadas, como existen en otras normas, como pueda ser, a los efectos similares a lo pretendido en esta, por ejemplo, en el art. 16 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo.